

## **Los modelos de mercado en Bolivia y la realidad del consumidor nacional en 2025.**

El presente artículo, inicia con el siguiente caso; recordando que en el pasado previo al “proceso de cambio”, nosotros los bolivianos podíamos acceder a comprar un vehículo si bien no eran “0” Km pero solía estar en muy buenas condiciones generalmente y lo más importante, con un precio de alrededor de 5.000 dólares americanos al tipo de cambio de su momento, ya era un ciudadano motorizado. Esta actividad de automóviles de segunda mano era legal y los bienes transados eran de procedencia lícita, ofreciendo una amplia variedad y calidad muy decente que favoreció a los consumidores bolivianos, este comercio floreció desde inicios de los 90s, democratizó el acceso a los vehículos y fue muy intensa hasta que se empezaron a cambiar las reglas del mercado automotriz, a partir de 2006, resultando en reducción de los importadores legales a pocos, con la consecuencia de un precio de adquisición de un usado suba, con una variedad de opciones reducida y creando indirectamente las condiciones para un mercado informal e ilícito de vehículos robados en los países vecinos

El punto es, que estas normas generan las condiciones para la formación de mercados ilícitos y no tributantes. Esta realidad nacional pasa con casi con todos los productos que consumimos y que son importados, insumos para producir medicamentos, alimentos y así un largo etc.

La idea principal de este artículo es: “los bolivianos estamos restringidos de acceder a todas las opciones de mercado que los países vecinos tienen debido a nuestro régimen de internación restrictivo, con sus consecuencias negativas para la sociedad y el propio Estado”. A continuación, explicare tres argumentos que sustentan lo mencionado.

Primer argumento, normas, para normas y reglas de importación duras y burocráticas. Explico cuando el consumidor necesita y quiere comprar un bien importado legalmente, solo lo puedo hacer de un importador legal que ha logrado que la aduana nacional, el Senasag en muchos casos, hayan aprobado su internación. Este proceso de internación solo pocas empresas están dispuestas a enfrentar y vencer procesos de nacionalización engorrosos, con para normas burocráticas y extensos en el tiempo, solo para tener el derecho de acceder al mercado nacional como formal. Lo más interesante, es que cada vez que otro nuevo importador desea importar el mismo bien o servicio, este se debe someterse a el mismo proceso burocrático para vencer las mismas normas y para normas, siendo que el producto o bien ya está aprobado su consumo en el mercado boliviano. Como resultado los costos inevitables y elevados hay poca oferta competitiva en relación a una demanda creciendo afectando directamente al cliente final, al que con estas normas en teoría deberían estas mismas normas haberlo beneficiado.

Segundo argumento, el “precio” de un bien es el principal determinante de su demanda y el principal discriminador de quienes lo pueden pagar y quiénes no. En un mercado formal con más competidores siempre el precio es más bajo, necesario repetir la palabra se forma un “precio más competitivo/menor”. El sistema actual boliviano donde el precio es elevado artificialmente genera una oferta menor a una demanda sobrada, como consecuencia se crea un mercado “negro” para la demanda ese bien. Este **mercado negro** satisface a los clientes que no pueden comprar de los pocos proveedores oficiales, pudiendo ser bienes que no de procedencia legal (robados), además que al no pagan los impuestos tanto aduaneros con los nacionales en general, IVA, IT e IUE son vendidos a precios artificialmente reducidos por debajo del precio de equilibrio del mercado al evitar los costos de la legalidad. El ejemplo de los insumos para cocinar como el aceite de cocina es un típico caso.

Tercero, la poca competencia afecta la cantidad y calidad de estos bienes importados a transar en el mercado formal, resultando ser menor a la cantidad de equilibrio del mercado y adicional la demanda insatisfecha es absorbida por el contrabando. Lo irónico del caso, es que el espíritu de estas para normas es proteger al consumidor, pero en la práctica, el demandante por su capacidad económica limitada no le queda otra que consumir bienes de dudosa calidad, en especial alimentos. Esto garantiza que los pocos importadores legales, vendan bienes con calidades y cantidades limitadas en relación a sus contrapartes en los países vecinos, entonces las ganancias adicionales de los pocos ofertantes formales, son las pérdidas incurridas del cliente y del mismo Estado. Esto se nota más en el mercado de los alimentos, ropa y bienes de consumo final.

En resumen, por los argumentos desarrollados en párrafos anteriores, los consumidores bolivianos estamos casi obligados a consumir, pocas cantidades, a precios mayores y de calidades menores que en otras económicas vecinas a la nuestra. Sin obviar que el Estado también pierde la posibilidad de recaudar impuestos por un contrabando creado artificialmente por estas normas en la actualidad. Debido a que pasamos de un régimen los cercano al libre mercado en 1985 a un oligopolio de unos cuantos importadores, donde ganaron unos pocos y perdió los ciudadanos de a pie en 2025.

Finalmente, propongo que el futuro Gobierno deba revisar estas normas que crean un régimen oligopolio y retornar a normativas más flexibles que nos acercaban más a libre mercado y evitando de procedencias de actos criminales. La idea es tener consumidores más felices y satisfechos con los bienes que han adquirido porque pueden comprar bienes importados a precios que ellos pueden pagar. El propósito es beneficiar a los consumidores finales y al Estado en última instancia siempre.

